

[7]

Hay sobretodo incertidumbre

Mi nombre es Silvio Casagrande May. Naci en San Andrés, en 1965, de madre raizal, proveniente de dos familias muy isleñas, May y Pomicore; y de padre argentino, descendiente de italianos. Ademá de mamá, me acompañan mi esposa y una hija. Estuve siete años en el continente, de 1982 a 1988. Después del bachillerato, me fui a Tunja a estudiar química pero me retiré a los dos meses. Seguí agronomía en Palmira, luego estuve en Santa Marta y terminé en la Universidad del Magdalena, donde me gradué de ingeniero agrónomo. Regresé a San Andrés, comencé a trabajar en la secretaría de agricultura y estuve allí siete años, hasta 1995, cuando ingresé a Coralina como subdirector de planeación y de gestión ambiental. En 1999, me retiré y me fui a Bogotá a especializarme en derecho ambiental. Estando en eso me designaron como gobernador encargado, cargo que ejercí de julio de 1999 a marzo de 2000. Tuve que iniciar un proceso de ajuste fiscal y una reforma administrativa, y sobre todo, tuve que cargar con el despido masivo de ochocientas personas. Los ocho meses siguientes estuve haciendo consultorías ambientales, dictando clases en Infotep, apoyando amigos en su campaña para la elección de diputados. Desde el 26 de enero de 2001, dirijo la Red de Solidaridad. Quiero seguir estudiando, hacer una maestría y, si tengo posibilidades, seguir en el sector público en San Andrés. Estoy metido en una ONG de nativos, soy el vicepresidente de la Cruz Roja y hago parte de la junta de la cámara de comercio.

Madre isleña con fuertes vínculos en el continente

Mi madre nació en el sector de San Luis y fue criada en Cartagena, en donde se educó. Vivió

Una convocatoria que combina la sensibilidad de las personas con la eficiencia de los sistemas tecnológicos. Una iniciativa que busca optimizar las estrategias de respuesta a las emergencias y mejorar la calidad de vida de las personas que ya han sufrido un desastre o se encuentran en riesgo. Una iniciativa que promueve la creación de una red de voluntarios y expertos en riesgos y emergencias que podrán ser llamados a actuar en caso de necesidad. Una iniciativa que busca fortalecer las capacidades de respuesta y recuperación de las comunidades afectadas por desastres y emergencias. Una iniciativa que busca promover la participación ciudadana y la responsabilidad social en la construcción de una sociedad más resiliente y segura.

en el continente por más de treinta años. Como muchos sanandresanos, iniciando los años cincuenta se fue a vivir en Barrancabermeja porque se requería personal que pudiera hablar los dos idiomas. Mi mamá trabajó diez años como secretaria de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), y cuando vivía allá, conoció a mi papá, un argentino descendiente de italianos. Se fueron a vivir a Barranquilla y mi papá se regresó luego y se volvió a casar con una santandereana en Buenos Aires.

Mi madre y su familia siempre han sido bautistas. En Cartagena la obligaron a bautizarse y cuando volvió a San Andrés, en 1979, recuperó su religión y ejerció algún liderazgo. Pero ha dejado de ir a la iglesia porque no está de acuerdo con que los pastores se metan a la política. Asiste en ocasiones especiales como a los entierros o a los encuentros de los coros. Perteneció a la Comisión Consultiva como representante de la casa de la cultura hasta que se retiró, en 1999, por la toma del aeropuerto. Está de acuerdo con muchas cosas del estatuto raíz pero hay otras que no le simpatizan. El hecho de que yo haya sido gobernador también la llevó a retirarse para no generar incompatibilidades.

Estudios en el continente, trabajo profesional en la isla

Después de mis primeros años de vida en la isla, comencé la escuela elemental en Barranquilla a donde se había ido mi mamá. El segundo primaria lo hice en la escuela nacional del barrio obrero.

de ahí en adelante hasta cuarto bachillerato en el colegio Modelo Adventista, y acabé en el Bolivariano. Me fui a Tunja a estudiar química pero me retiré a los dos meses. Seguí agronomía en Palmira, luego estuve en Santa Marta y terminé en la Universidad del Magdalena donde me gradué de ingeniero agrónomo. Así, estuve siete años en el continente, de 1982 a 1988.

Regresé a San Andrés y comencé a trabajar en la secretaría de agricultura y estuve allí siete años, hasta 1995, cuando ingresé a Coralina como subdirector de planeación y de gestión ambiental. En 1999, me retiré y me fui a Bogotá a especializarme en derecho ambiental. Estando en eso me designaron como gobernador encargado, cargo que ejercí de julio de 1999 a marzo del 2000. Los ocho meses siguientes estuve haciendo consultorías ambientales, dictando clases en Infotep, apoyando amigos en su campaña para la elección de diputados en 2000. Desde el 26 de enero de 2001 dirijo la Red de Solidaridad.

El duro trabajo como gobernador

En la gobernación me tocó hacer el trabajo más duro posible. Encontré un caos, una anarquía total, mucha oposición de todo el mundo en el sector político, escepticismo por parte de la comunidad. Conseguí pocas alianzas aunque el sector privado me acompañó, tuve colaboradores muy leales y personas que estaban muy cerca de mi. Tener que iniciar un proceso de ajuste fiscal y una reforma administrativa, y sobre todo, tener que cargar con el despido masivo de ochocientas personas, es algo tremendo. No se despidió a la gente porque fueran nativos sino por la emergencia, y como la casi totalidad de empleados eran raizales pues fueron los más afectados.

Yo sabía que tenía que hacerlo pues era el futuro de San Andrés el que estaba en juego y estaba convencido de que era lo correcto, pero aun así fue una labor muy difícil. A partir de ese momento muchas cosas pudieron empezar a cambiar, y el tiempo me ha dado la razón. La gente no sabía en qué condiciones estaba la gobernación, que no había ninguna manera de pagar sueldos y menos de hacer inversión social o en la infraestructura deteriorada. Había que hacerle frente a la crisis porque si no la situación hubiera sido peor. Eso ayudaba a la paz pero

tenía un alto costo político. Ningún político lo iba a ser. Yo estaba totalmente convencido de que un nativo tenía que hacer el ajuste. Por eso no me presté ni me usaron para un trabajo sucio. Hubiera sido explosivo y muy diferente si no hubiera sido un nativo sino un continental el que tuviera que tomar esas drásticas medidas. Eso mitigó el conflicto. El gobierno central intentó con David Soto, y generó la toma del aeropuerto; casi lo linchan. La comunidad estaba pidiendo que designaran a alguien raizal.

Desde ese momento la vida para mi familia ha sido muy difícil. Estuve diez días privado de mi libertad por una tutela, me han amenazado, tuve que irme un tiempo y sigo con procesos. Terminé empapelando diez años de mi vida por ocho meses de esa responsabilidad. Pero como persona y como profesional creo que valió la pena. Cambié la perspectiva sobre muchas cosas, empecé a verlas de otra manera, aprendí más de la política y de la gente que hace parte de la política, crecí y maduré muchísimo. De esa gestión me quedó un buen nombre. A pesar de que mucha gente no me quiere, si me respetan. Me ha dado la posibilidad de tener las puertas abiertas para muchas cosas, me satisface que muchas personas creen en mí y aprecien mi trabajo.

Quedé triste de la política. Es muy difícil desarrollarla en San Andrés pues lo dejan a uno solo, pierde amigos y familiares. Por eso, aspiraciones políticas no tengo. Además, hay cosas que no estoy dispuesto a negociar, como la tranquilidad de mi familia y de mi casa. Quiero seguir estudiando, hacer una maestría, y si tengo posibilidades, seguir en el sector público en San Andrés. Estoy dispuesto a seguir colaborando desde otro punto de vista. Estoy metido en una ONG de nativos, soy el vicepresidente de la Cruz Roja, hago parte de la junta de la cámara de comercio.

El plan de retorno voluntario

En la Red de Solidaridad estamos desarrollando el programa de apoyo al retorno, como fue el compromiso del presidente Andrés Pastrana. Se trata de un proceso de renuncia voluntaria a la residencia en San Andrés por parte de continentales que estén legalmente establecidos. Esa es una condición de su envío para su ciudad de origen o a otra que los acepte.

El plan de retorno funciona interinstitucionalmente. En el nivel local, lo coordinan tres entidades, que son la OCCRE, el Inurbe y la Red de Solidaridad Social. La Red tiene recursos propios, el Inurbe también y la OCCRE tiene a su cargo, más que todo, una parte logística y el componente de postulación y verificación de las personas que se presentan, la aprobación e inclusión de las familias dentro del plan y la autorización para que se acojan a los programas de asistencia que presta la Red y a los programas de vivienda, en el caso que el Inurbe los tenga. La gente interesada manifiesta ante la OCCRE su deseo de irse, se inscribe, llena un formulario y cuando ellos expiden la resolución administrativa correspondiente, iniciamos el proceso que dura de seis a siete meses. Por parte de la Red, el Plan se ejecuta con base en un convenio de cooperación entre la Red y la Organización de Estados Iberoamericanos, que es el convenio 630 del 2001, y debe ejecutar 2.000 millones de pesos. Es una ayuda que se le presta a las familias que voluntariamente van a retornar al continente.

El plan incluye tres componentes suministrados por la Red. El primero es de fortalecimiento institucional, que lo hacemos desde acá a partir de la caracterización de las familias y la identificación de sus necesidades. Es la conformación de bases de datos y de todo lo que tiene que ver con la logística local. Ya con el apoyo a las familias, viene el transporte, que tiene varios subcomponentes. La movilización aérea de todo el núcleo familiar desde San Andrés hasta los destinos aéreos; en este caso vamos a movilizar personas hasta Barranquilla y hasta Cartagena. Luego el transporte terrestre, por ejemplo, en el caso de las personas que van a Santa Rosa de Bolívar desde Cartagena, se les dan cinco mil pesos por cada miembro de la familia. También está el transporte del menaje en barco desde San Andrés hasta Cartagena o Barranquilla, y adicionalmente desde el puerto hasta la vivienda. Tiene unos recursos en dinero que se les dan desde aquí. Adicionalmente, se les apoya con lo que llamamos seguridad alimentaria. Esta es una asistencia para que en el primer mes puedan conseguir alimentos básicos, mediante bonos Sodexho Pass. Son \$ 50.000 por chequera que se le da a cada miembro de la familia.

Una tercera línea de acción con recursos de la Red, trata de apoyar acciones para generar empleo. Hemos procurado hacer eso a través de una ONG. Se hizo una convocatoria en junio. No se presentaron organizaciones, solamente una universidad que no llenó los requisitos, por lo que se declaró desierta. Ahora se está haciendo una gestión para ver si a través del SENA se puede apoyar a las familias que ya han retorna. El apoyo consiste básicamente en capacitación, gestión de recursos y respaldo en algunas iniciativas. El programa tiene unos componentes que son de gestión en lo que tiene que ver con educación. Esta parte se concuerda con la secretaría de educación y el ministerio de educación, para conseguir los cupos escolares a los lugares donde llegan. La propuesta es que los colegios públicos de aquí los exoneren de matrícula mientras ellos se ubican allá o que las personas transfieran a los hijos para que no pierdan clases. En salud, como son familias que tienen Sisben y algunas Caprecom, se busca que sean recibidas por las cajas de compensación sin que tengan que haber residido en el lugar de llegada por más de seis meses, sino que los atiendan inmediatamente y puedan ingresar al sistema. La idea es que se desafilién aquí del Sisben y se reafilien a donde lleguen.

Hasta ahora hemos venido apoyando únicamente a las familias a las que el Inurbe les asignó una vivienda en diciembre del 2001. Inicialmente, fueron 105, pero a la fecha sólo tenemos 74 familias que están en proceso de retorno, de las cuales 33 ya lo han hecho. El Inurbe está avanzando en la construcción de una urbanización para 45 familias, en poblaciones cercanas a las capitales como Villanueva, Santa Rosa y Turbaco en Bolívar, proceso que se demora de tres a seis meses hasta que se otorgan las casas. El compromiso es que las familias se vayan cuando están ya relocalizadas. Al momento de salir deben devolver su tarjeta de la OCCRE como residentes. La gente pensaba que, por esa devolución había que pagarles cinco, seis o siete millones, que la tarjeta valía más que una casa.

Tenemos programada una segunda fase, que va de octubre a diciembre de 2002, y consiste en la movilización de 40 familias adicionales, de los 74 previstos, y con la OCCRE hemos venido tratando de dejar abierta la posibilidad de que, si hay

familias que quieran retornar sin el componente de vivienda, lo puedan hacer. Tenemos más o menos unas cinco familias inscritas.

Inicialmente, el programa se dio a conocer por medios de comunicación y, además, conjuntamente con la OCCRE, hicimos unas encuestas para ubicar población potencial para el programa. Visitamos los distintos sectores, hablamos con la gente y les dijimos: Miren, está esto ¿a ustedes qué les parece? ¿qué necesitan? ¿están dispuestos a dejar su residencia? Las encuestas mostraron que dentro de las prioridades de la gente estaba el tener vivienda propia y, además, darle un mejor futuro a sus hijos. Muchos no ven futuro en San Andrés para la educación de sus hijos; no ven "chance" para que puedan acceder a una universidad.

El Plan no carece de dificultades. Hay mucha desconfianza de las instituciones del Estado. Los candidatos potenciales no creían que les fueran a dar la casa gratis. Pensaban que iban a tener que pagar por ella. Luego, muchos políticos se metieron en el camino o hubo mal manejo de la información, lo que llevó a que mucha gente se retirara. La gente raizal tampoco cree mucho en el programa. Creen que no funciona. Dicen: ¿de qué nos sirve sacar setenta familias si lo que necesitamos es sacar diez mil? Lo que esperan es que haya movilizaciones en masa para forzar al retorno masivo.

La gente dice que no se ha cumplido, pero no es tan simple. Nos tocó idear los procedimientos, que están en prueba en esta primera fase experimental diseñada para 750 familias, cada una con tres miembros en promedio. Además, no se puede forzar a la gente, que siempre tiene temor de que el Estado no les vaya a cumplir. Para impulsar el programa la Red y el Inurbe han hecho una divulgación por radio, lo han presentado en algunas dependencias de la gobernación, a los prestadores de servicios públicos y a la defensoría del pueblo, que hace la vigilancia. Aunque el programa está consignado en el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) N° 3058 y cuenta con \$ 2.000 millones para la Red y otro tanto para el Inurbe, la discusión sobre los recursos duró dos años y solo estuvieron disponibles en diciembre de 2001. Luego, su aplicación implica para el Inurbe un proceso

dispendioso desde que hace el contrato de comapraventa, abre la cuenta y consigna los recursos pertinentes, que la persona no puede tocar. Ha hecho falta una mayor coordinación con el Inurbe y con las demás entidades implicadas. Hay que estar rediseñando los procedimientos ante situaciones excepcionales. Además, sería necesario contar con un equipo de trabajadoras sociales dedicadas a visitar los asentamientos subnormales para promover, por ejemplo, que barrios completos sean movilizados en conjunto, porque así, uno a uno, no se ve la labor y el impacto es menor; o para ver de qué región son los potenciales usuarios, si hay que movilizar a gente ligada a una etnia, lo que es aún más complicado, si pueden volver al lugar de donde vinieron o hay que reubicarlos en otro sitio.

Pese a todas las dificultades, todo está dado para que, a los que retornan, les vaya mejor. Las condiciones de vida que tenían en San Andrés no eran muy buenas. La mayoría vivía en zonas subnormales, sin vivienda, niveles 1 y 2 de Sisben, sin empleo, en muy malas condiciones de vida. Básicamente lo que el programa busca es mejorarles un poco su calidad de vida. El hecho de que el Inurbe les asigne una casa es muy importante. El apoyo que presta la Red no implica ningún compromiso legal. En realidad, el único compromiso es que la persona renuncie voluntariamente a la residencia y eso lo hace la OCCRE. Nosotros no manejamos ese proceso. Para las gentes que -por razones económicas- se quieren ir, el plan es una buena opción, pues no han tenido vivienda ni en la isla ni en el sitio de donde venían y se van con casa a donde lleguen. Es posible que su situación cambie, que dejen de vivir en condiciones subnormales. Todo depende de ellos.

La mayoría de las personas que han decidido irse, está muy contentas. Sólo unos pocos están inconformes. Algunos no han conseguido empleo, pero muchos han empezado a desarrollar sus propias actividades. Por ejemplo, una familia en Montería montó una tienda y la tienen funcionando. Los que no han conseguido empleo ni han creado su propio negocio se han visto en dificultades porque, en el momento en que se les acaban los bonos, empieza el problema por la consecución de alimentos. Ahí se origina la inconformidad.

El futuro del proyecto -si se continúa el otro año o no se continúa- depende de la política de la nueva dirección. Nuestros recursos están prorrogados hasta junio del 2003 y están destinados para mil familias. Pero yo no creo que alcancemos a tener mil familias para mover. El proyecto es lento, la planificación es compleja, es difícil que las personas se acojan voluntariamente, hay mucha incertidumbre, no se sabe qué está pasando. Ayuda el tener una vivienda garantizada, sin embargo, ahora mismo el Inurbe no tiene un proyecto de vivienda claro para las familias que quieran regresar. Están a punto de liquidar el programa. Entonces lo de la vivienda quedaría en el aire y ese es un gancho fuerte para que la gente se vaya. De hecho, mucha gente se quiere ir, pero ya no hay vivienda. Eso es algo que tiene que hacer el gobernador: gestionar nuevos cupos para vivienda, porque el Inurbe ya no puede hacerlo, e igualmente, es una institución que está en peligro de desaparecer.

Ojalá el plan tenga continuidad con el nuevo gobierno porque es un Conpes de iniciativa presidencial y podrían cambiar todos los funcionarios. Si el sector político local y los representantes a la cámara por San Andrés se comprometen, podría ayudar en algo a resolver el problema de la sobre población. A mi me parece que es un programa a largo plazo. En la medida en que la gente se pueda estabilizar económicamente en el lugar adonde vuelve, va generando una publicidad para que otra gente se vaya.

El movimiento raizal

Aunque cuenta con mucha gente preparada y con fuerte capacidad de arrastre, el movimiento raizal, no ha sabido enfocar su parte política. Algunos líderes pueden tener poder en el púlpito pero ese poder no se traslada, del discurso religioso al político hay mucho trecho. Saben ser energéticos y la gente grita pero salen y esa energía se apaga. No hay forma de canalizarla. Los líderes son personas bastante interesantes que dicen la verdad al que sea, pero tienen que saber hacer alianzas estratégicas, tienen que buscar que otra gente se adhiera, pues casi todo el mundo está de acuerdo con las reivindicaciones levantadas por ellos pero no con la forma de buscarlas. Tendrían que hacer alianzas, por ejemplo, con los

hoteleros o los comerciantes para ver cómo ingresar raizales a ese sector y en qué condiciones, con la parte educativa para trabajar con otros criterios, para fortalecerla y cambiar las expectativas de vida orientadas a un mejor bienestar.

Está bien permanecer vigilantes ante cualquier proyecto. Tenían todo el derecho de pedir explicaciones frente a la propuesta de guardacostas, pero una vez las alcanzan no negocian condiciones y más bien frenan recursos y obras que van a beneficiar a toda la gente. La construcción del guardacostas podía generar empleo para raizales y dejar un sistema de tratamiento que involucrara a gente de barrios nativos para ayudar a descontaminar la Bahía Hooker. Pero la rechazaron sin dar alternativa. Y la gente que se pierde en el mar son raizales a quien nadie va a buscar. Hubieran podido negociarla de una forma diferente, que no fuera como estaba planteada, modificar su estructura, atarla a empleo raizal. Lo mismo pasa con las dos propuestas de muelle turístico, el pequeño o el grande de los españoles. Hay posibilidad de negociar y llegar a unos acuerdos, que permitan poner en marcha proyectos que den empleo, que bajen la pobreza. Está también la idea de ampliación del aeropuerto. Pero la negativa a todos los proyectos no deja nada de fondo. Esa posición del no a todo es compleja.

No basta con obligar a que se realicen consultas si no es para llegar a acuerdos. Por eso el movimiento raizal ha sufrido el desgaste de los paros y protestas, pues marcha y se mueve pero no ha producido resultados. Dejó pasar la oportunidad de fortalecer la comunidad, de ayudar a que sus condiciones cambien, a que su calidad de vida mejore. Es verdad que han hecho un trabajo válido que los demás no han hecho. Cuando se ha concertado se han conseguido cosas importantes como el bilingüismo o el artículo 310 de la Constitución. A veces, por oponerse a todo, ni se han dado cuenta de lo que su presión ha conseguido como, por ejemplo, el decreto que modificó la OCCRE, este programa de reubicación, el del Inurbe de 2.620 viviendas nuevas en San Andrés únicamente para raizales o el mejoramiento de 442 viviendas solo para raizales en San Andrés y en Providencia, que algo podrían beneficiar a la gente. Como el movimiento no tiene visión política, el crédito se lo lleva otro. Tendrían

que hacer alianzas para mejorar la parte social y económica pero para eso tienen que cambiar el discurso, e incursionar en los temas económicos.

El movimiento raizal ha perdido fuerza y mucha credibilidad y en su interior priman los intereses particulares sobre los colectivos. Todo el mundo se mueve por lo suyo, aunque hay algunos con quienes se puede llegar a hacer acuerdos por el beneficio de la gente, para desarrollar la comunidad. Pero hay otros que son muy negativos, que se oponen a todo y le han hecho mucho daño a la comunidad y a la isla. Hay también gente que se mete al movimiento pero que tiene intereses económicos, de apoderarse de tierras, de la industria hotelera y del comercio. Algunos buscan inscribir una ONG para beneficio personal, viajar y mejorar su situación económica, pero de fondo no hacen nada, y aunque podrían lograr muchas cosas concretas a favor de la comunidad a través de proyectos que pueden negociar para sacar recursos, no son capaces de conseguir ningún resultado para la gente. Otros tienen serias acusaciones sobre su proceder, lo que les quita credibilidad. Varios del movimiento mantienen nexos políticos por debajo de la mesa, se prestan mutuo apoyo en algunas cosas en beneficio particular y algunos lo hacen desde su función religiosa.

La falta de liderazgo local y nacional

Yo no critico al gobernador Ralph Newball porque pasé por ahí y uno sabe lo difícil que está la situación. Y es muy poco el margen para satisfacer a la gente. Hay reacciones para buscar otro tipo de gobernante, mientras que la población raizal, que es más amplia que el grupo de los pastores, está muy dividida. Cada uno de los líderes se lanza electoralmente por su lado para saber con qué cuenta. Los raizales somos la casi totalidad del sector público, hay raizales en la asamblea, somos la fuerza y el poder político en San Luis y La Loma. Así no lo reconoczamos, los raizales si ayudamos a confirmar lo que pasa políticamente.

Claro, hay una dislocación entre el voto y la movilización, la protesta. La gente te dice: soy tu amigo pero no voy a votar por ti. Su voto está ligado no tanto al estímulo económico inmediato sino a lo que tu puedes llegar a hacer por mi como político. La gente vota por quien pueda

tener más poder, es decir, más posibilidad de ofrecer empleo, insertarlo en la burocracia, colaborarle con algo para la vivienda o la educación de los hijos. De alguna forma se sigue haciendo política así y hay barones electorales que saben cuántos votos tienen, que están pendientes de cada uno de ellos y de su familia, y que pelean por su pequeño sector. Así es la elección para la cámara o la asamblea.

Mientras que los líderes raizales no se preocupan por mejorar concretamente la vida diaria de las gentes, los políticos meten a la gente en planes de mejoramiento de vivienda o consiguen recursos para sus hijos. Tienen sus barrios, manejan mucho dinero o facilidades para acceder a recursos para el proceso electoral, a los jefes nacionales, a uno u otro senador en busca de un apoyo particular. De ahí que el voto no es de conciencia y la gente protesta y luego vota por los mismos responsables de los problemas.

Por ese comportamiento de los políticos y de los movimientos raizales nunca ha habido un proyecto económico concertado ni liderado con el gobierno nacional. Ha habido expectativa de lo que haga Bogotá y cómo se acomoda uno u otro. Es increíble que el proyecto de alcantarillado se cayó en la asamblea porque por el conflicto entre el legislativo y el ejecutivo, no fueron capaces de concertar. Hay que acercarse a dialogar, a concretar acuerdos porque hace falta un marco institucional de largo plazo. No hemos construido visión de desarrollo. Estamos en el limbo. Así no se puede construir nada. Lo único que hay que hacer es alianzas claras para vincular a todo el mundo, y no solo a los raizales por un lado, al comercio por otro, y a la hotelería por su cuenta. Hay que resolver el conflicto de intereses particulares y pensar en un acuerdo colectivo y concertar cosas concretas que les interesen a todos. De lo contrario, si cada uno sigue por su lado, si no hay un proyecto de futuro, sigue la degeneración de la isla.

Falta también liderazgo del sector público para sentar a todo el mundo en la mesa y concertar un plan para los veinte años futuros, y poner a todos a trabajar hacia eso. Dejemos de tirarnos piedra unos a otros. El panorama lo veo todavía muy gris. Hay sobretodo incertidumbre. Después del ajuste fiscal en 2005 puede haber recursos

para lo social, económico, pero de aquí a allá las cosas se pueden agravar. Creo que el gobierno central tiene cierta culpa porque no da respuesta a las reivindicaciones concretas.

La demanda de Nicaragua

Me parece que la gente no le para muchas bolas a lo de Nicaragua porque ha sido repetitivo con cada cambio de gobierno en ese país, o cuando están en lós. Cuando los sandinistas nos reclamaron se

hizo una primera marcha a favor de Colombia. Con la demanda la situación ha cambiado y los raizales que están enviando documentos y trabajando sobre eso pueden afectar la isla.

Es un error que el gobierno central haga consultas sólo con un solo sector, el del movimiento raizal, que, si bien se ha ganado un espacio, no representa la opinión de todos los raizales. Y el gobierno siempre se dirige sólo a ellos.

Soy Mariana Corpus Robinson, Naci en San Andrés, en 1962, soy la segunda de cuatro hermanas y estoy casada con un enfermero del hospital. Vivíe con una sobrina y he criado un sobrino. Mi padre falleció y mi madre vive con dos de mis hermanos.

Considero mi vida una vida sana, llena y contenta, es el sentido de que conozco al Señor Jesús y todo mi dedicación, todo lo que he hecho y pienso hacer es en nombre de él. Desde los cuatro años hasta ahora, me siento muy realizada como cristiana y en el campo profesional.

Experiencia y mundo

Soy egresada de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) como tecnóloga en administración municipal, lo que me ha ayudado a tener experiencia y mundo. Estuve en la secretaría como jefe de personal y de compras, y como jefe de la división administrativa y financiera de la secretaría de educación. Estuve quince años en estos trabajos en el gobierno pero, por ser cargo de libre nombramiento, me retiraron.

De ahí empecé a esperar a ver qué se me presentaba y fui llamada para administrar la residencia Harbor View, perteneciente a la las Iglesias baptistas de la Loma, situada a la subida del colegio Bicentenario. Y con mucho gusto acepté. Hasta diciembre de 2001 la promocionamos como sitio turístico para hospedaje, reuniones, matrimonios, y en 2002 la asociación la usó como sede de su oficina hasta que alguien la alquiló para la iglesia metodista. Ahora, ya no tienen

poder arreglarla y mantenerla. Actualmente trabajo con la Iglesia bautista Emmanuel como censora, secretaria y administradora. Siempre he querido servir al Señor. Estoy estudiando a distancia educación religiosa en el seminario teológico de Miami. Acabo de graduarme y depende de mí si gasto dos o tres años para salir con un título de educadora religiosa.

Los problemas de la isla

San Andrés, desde que tengo conciencia, ha cambiado mucho. Recuerdo cuando yo era niña cómo las cosas eran tan sencillas. Ya entonces la gente mayor nos decía que en años atrás esto fue un paraíso, que las cosas marchaban mejor, que había respeto y eran más religiosos. Todo el mundo ayudaba al otro, cada familia comparte, pensaba en el otro. Eso cuentan los abuelos. Si se hubiera mantenido como hace 25 años la isla estaría bien. No era que no existiera pobreza, pero había oportunidades de trabajo, quizás porque circulaba mucho más dinero. Financieramente era mejor atendida por el gobierno nacional.

La superpoblación es otra de las causas de este deterioro. Antes no había tanta necesidad de bajar por sobrevivir porque las cosas eran abundantes. Ahora, como hay más gente, menos cosas valen a tener. Además con esta insuficiencia en los servicios nos empezó a llegar la superpoblación. Si no te controlas uno no aguanta ni física ni moralmente. Algunas personas se sienten los aguantan más y se va hacia el fondo.